

Resolución N° 134/2013

INDDHH N° 309/2013

Montevideo, 8 de noviembre del año 2013

Sr.

De nuestra mayor consideración.

La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) recibió oportunamente una denuncia presentada por Ud., y que fuera ingresada con el N°309/2013.

Conforme lo establecido por el artículo 11 de la ley 18446 de 24 de diciembre del año 2008, la INDDHH inició los correspondientes procedimientos de investigación.

La ley 18446 determina claramente el alcance de la competencia de la INDDHH. De acuerdo a este marco normativo, entre otras competencias, es preceptiva la intervención en asuntos donde puedan existir eventuales vulneraciones de derechos humanos, habiendo dado inicio a las actuaciones una denuncia de parte o la intervención de oficio de la Institución.

Asimismo, la INDDHH está facultada para dar por finalizada la intervención cuando la vulneración denunciada ha sido subsanada o bien cuando la misma ha finalizado.

Cuando la intervención de la INDDHH ha sido motivada por una denuncia de parte, en la medida que, luego de hecha la investigación, no se detectan problemas de carácter general, la actividad queda sujeta al interés de parte desde que, entre otras cuestiones, es obligación dar vista de lo informado por el organismo denunciado.

La denuncia que Ud. realizó, versó sobre las demoras a que está sujeto en el trámite de renovación de la pensión no contributiva de invalidez que percibe desde el año 2003 y en el otorgamiento de la pensión que resulta del artículo 3° de la ley 19039.

Hechas las consultas al organismo de previsión social por oficio N° 202 de fecha 30 de julio, reiterado por oficio N° 233 de fecha 16 de agosto y reiterado por oficio N° 263 de fechas 13 de setiembre, se contestaron las mismas con fecha 19 de setiembre por oficio BPS/0269/2013.

Surge de la respuesta brindada en primer término que el trámite para el subsidio para víctimas de crímenes violentos no fue otorgada por la Administración por entender que no encuadraba dentro de los presupuestos legales.

Sobre el particular cabe agregar que, según fue comunicado por el denunciante, y de imposible comprobación por nuestra parte, las expectativas para el cobro de este subsidio fueron alentadas desde la baranda del propio organismo, por personas

Juncal 1355 Piso 10

Teléfono: 1948

secretaria@inddhh.gub.uy



Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo

evidentemente no calificadas ni autorizadas para ello, lo que en nada mitiga el empeño puesto por el denunciante para gestionar su cobro y su posterior presentación ante esta Institución. Igualmente, la percepción de dicho subsidio se encuentra en trámite.

Esta Institución se encuentra inhibida de actuar en asuntos que se hallen en trámite, teniendo sin embargo la obligación de velar según mandato legal para que la Administración resuelva en tiempo y forma las solicitudes que hayan sido interpuestas.

Respecto de la renovación que iniciara el denunciante durante el mes de diciembre del año pasado aún no ha habido pronunciamiento sobre el particular.

El debido proceso no tiene una regulación legal exacta, siendo de su esencia el derecho que tiene toda persona de tener su día ante el tribunal, amén de otras características que aplican independientemente de si el trámite se encuentra en la órbita judicial o administrativa.

Ese derecho tiene otros contenidos entre los que se mencionan, que se confiera vista de las actuaciones administrativas, ser asistido por un Abogado, a formular sus descargos, a presentar y solicitar que se diligencien las pruebas ofrecidas, a la motivación de la decisión, y a un procedimiento de duración razonable.

Este procedimiento, constituye el amparo por el cual se asegura con mayor efectividad los bienes jurídicos tutelados por el Estado, la defensa de la persona y el respeto de su dignidad. Los aspectos generales que puedan rodear a un caso particular sí quedan dentro de nuestras competencias según el artículo 19 de la ley 18446.

Los motivos que alega la Administración para la demora en el trámite de las renovación son el cambio de domicilio y las limitaciones presupuestales que tiene el Banco para la captación de recursos humanos formados en ciertas áreas de la medicina.

Sin embargo, tales limitaciones no pueden repercutir en la esfera de derechos del administrado, privándolo de acceder a la prestación que constituye su único sustento.

Según la comunicación cursada, las causas del tiempo transcurrido estarían dadas por la existencia de limitaciones operativas presupuestales y la existencia de las particularidades que tiene el mercado laboral de los profesionales médicos, para lo cual se encuentran a estudio formas de mejora continua del servicio.

En ese contexto debe tenerse en cuenta por parte de la Administración que el derecho a una cobertura de seguridad social se encuentra regulado en forma por diversos instrumentos internacionales y recogidos a través de nuestra Constitución y ordenamiento legal y no puede quedar relegado por cuestiones administrativas ni presupuestales que repercutan en el administrado, o en todo caso debe garantizarse que en situaciones como la presente, donde la persona empezó la renovación durante el año 2012 con la suficiente antelación para no dejar de percibir su único ingreso, el cobro no

Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo

se vea interrumpido, sin perjuicio de la evaluación que se haga para su percepción por otro período de tiempo.

Por último, cabe anotar que el Banco de Previsión Social debió ser consultado en tres ocasiones acerca de la información requerida, habiendo vencido el plazo establecido en el artículo 21 de la ley 18446. Si bien se establece a texto expreso plazos taxativos para la respuesta del organismo requerido y a continuación las medidas ante los incumplimientos, el interés primordial de esta Institución es la promoción y protección de los derechos de las personas y no la aplicación de otros mecanismos legales.


Es en uso de las facultades que tiene la INDDHH que se recomienda al Banco de Previsión Social que:


- 1) Establezca los mecanismos y correcciones necesarias para que los beneficiarios que ya se encuentran percibiendo prestaciones servidas por el organismo no vean interrumpido su cobro por cuestiones internas de las diferentes secciones de la institución;
- 2) Informe en el plazo de 30 días sobre la renovación de la pensión servida al Sr
- 3) Informe en un plazo de 120 días si se han logrado avances en la mejora del servicio conforme lo que resulta de la página 2 del oficio BPS/0269/2013.
- 4) Tenga presente los plazos establecidos para la respuesta de las comunicaciones cursadas desde la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.

Conforme lo establecido en el artículo 25 de la ley 18446 se notificará de las presentes al Banco de Previsión Social.

Reciba Ud. nuestros cordiales saludos.


ARIELA PERALTA
DIRECTORA
Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo


MARIANA GONZÁLEZ GUYER
DIRECTORA
Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo


MIRTHA GUIANZE
DIRECTORA
Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo